

En la sesión extraordinaria efectuada el día dieciocho de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo recaído a la consulta formulada por el Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y de Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, relacionada con la posibilidad de difundir las versiones públicas de las sentencias emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

ANTECEDENTES

Aprobación y ajustes del plan integral y calendario

I. En la sesión extraordinaria efectuada el seis de julio de dos mil veinte, este Consejo General, mediante el acuerdo CGIEEG/021/2020, aprobó el plan integral y calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021.

En sesión ordinaria efectuada el veintiocho de agosto de dos mil veinte, mediante el acuerdo CGIEEG/037/2020 se modificó el plan integral y calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021 y se ajustaron diversos plazos.

En la sesión ordinaria efectuada el treinta de octubre de dos mil veinte, mediante el acuerdo CGIEEG/075/2020 se modificó el calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021 y se establecieron los requisitos de las comunicaciones de los partidos políticos sobre sus procesos internos de selección de candidaturas.

Posteriormente, en la sesión extraordinaria celebrada el seis de enero de dos mil veintiuno, se aprobó el acuerdo CGIEEG/004/2021, mediante el cual se modificó el plan integral y calendario del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Conforme a dicho acuerdo, los periodos de campaña para los cargos correspondientes a integrantes de ayuntamientos y diputaciones locales son los siguientes:

Tipo de elección	Fecha de inicio	Fecha de término
Ayuntamientos	5 de abril de 2021	2 de junio de 2021
Diputaciones	20 de abril de 2021	2 de junio de 2021

Aprobación del Reglamento de Campañas

II. En la sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de marzo del año en curso, este Consejo General emitió el acuerdo CGIEEG/087/2021, mediante el cual se aprobó el *Reglamento de Campañas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021*.

Consulta

III. El ocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto el oficio 065/2021/P suscrito por el Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, en su carácter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, mediante el cual realizó una consulta a este Consejo General, en los términos siguientes:

«[...] durante los próximos meses, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en acatamiento a lo establecido por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 17, apartado C y 122 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, los artículos 203 y 350, fracciones II y IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y en atención al acuerdo CGIEEG/075/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pretende continuar generando **información pública de carácter institucional**, que versa sobre servicios que presta la institución en ejercicio de sus funciones, así como temas de interés en general. En tal tenor, tiene prevista la difusión de una campaña relativa a la divulgación de las **versiones públicas de las sentencias, emitidas por las y los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia**.

[...]

En ese sentido, solicito a Usted de la manera más atenta, tenga a bien indicarnos si dicha actividad cumple con las obligaciones y respeta las prohibiciones que existan en materia electoral, de tal forma que no se actualice una infracción a la normativa electoral, a fin de no poner en riesgo los principios constitucionales que la materia electoral tutela y **conducirnos con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021.**»

CONSIDERANDO

Personalidad jurídica del Instituto y principios que rigen su actuación

1. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* y la propia *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*. De igual manera, señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia electoral, en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos antes citados y la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*.

Órgano superior de dirección

2. El artículo 81 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Integración del Consejo General

3. El artículo 82, párrafo primero, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, indica que el Consejo General se integra por un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaría Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

Atribución del Consejo General para desahogar consultas

4. De conformidad con el artículo 92, fracción XXVI, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, es atribución del Consejo General desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de dicho ordenamiento legal.

Respuesta a la consulta planteada

5. Para dar respuesta a la consulta realizada por el Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, en su carácter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, referida en el antecedente **III**, se identifica que la misma plantea la posibilidad de continuar generando información pública de carácter institucional, que versa sobre servicios que presta el Poder Judicial, mediante la difusión de una campaña relativa a la divulgación de las versiones públicas de las sentencias emitidas por las magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Primeramente, debe tenerse en cuenta que el artículo 41, base III, apartado C, segundo párrafo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, **deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales**, como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y **cualquier otro ente público**.

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Por su parte, el artículo 134, párrafo octavo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener **carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social** y que, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público.

Las reglas anteriores se reiteran, en los artículos 17, apartado C, y 122 de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato*, así como en los artículos 203 y 350, fracciones II y IV, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*.

Asimismo, respecto de las campañas de comunicación social, el artículo 21 de la *Ley General de Comunicación Social*, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en medios de comunicación, precisando que en el caso de los procesos electorales locales, deberá suspenderse la difusión de campañas de comunicación social en los medios de comunicación con cobertura geográfica y ubicación exclusivamente en la entidad federativa de que se trate.

Conforme a dicha disposición legal, se exceptúan de lo anterior las campañas de información de las autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud; las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; y cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse. Cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la administración pública deben acatar la normatividad aplicable que ordene la suspensión de las campañas gubernamentales.

Por otra parte, en la resolución del recurso de apelación SUP-RAP-119/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que por propaganda gubernamental debe entenderse el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo las servidoras y servidores públicos y las entidades públicas, **cuando tengan como finalidad difundir, para el conocimiento de la ciudadanía, la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno, con el objeto de conseguir su aceptación.**

En dicha resolución, se puntualizó que para estar en presencia de propaganda gubernamental se requiere la actualización de los siguientes elementos:

- a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública;
- b) Que éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones;
- c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno; y,
- d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía.

Asimismo, al resolver el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-474/2011, se precisó por parte de la Sala Superior, que la prohibición relativa a la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales tiene como finalidad **evitar que se pueda influir en las preferencias electorales de las ciudadanas y ciudadanos, a favor o en contra de determinado partido político, candidata o candidato.**

Aunado a ello, en la jurisprudencia 18/2011 de rubro: «PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD.»¹, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de emergencia, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia.

En cuanto a las excepciones a la prohibición en comento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-57/2010, señaló que **el concepto de educación** a que se refiere la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* comprende aquél que tiende a desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentar al amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y **en la justicia**; asimismo, estableció que se trata de la educación escolarizada, además de otros servicios tendentes a lograr el constante mejoramiento cultural del pueblo y que contribuyen a obtener una mejor convivencia humana, sustentada, entre otros, en el principio de igualdad de derechos de todas las personas.

Además, en la sentencia del recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-54/2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral estableció que el artículo 3

¹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 35 y 36.

de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, concibe la educación como un concepto integral, que no se reduce a la transmisión de conocimiento por medio de la actividad docente, sino que amplía al conocimiento social y cultural del pueblo, al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a la exaltación de nuestra cultura.²

En este contexto, durante las campañas electorales no se encuentra prohibida la difusión de las versiones públicas de las sentencias emitidas por las magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ya que ello debe realizarse en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73, fracción II, de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, y 30, fracción I, de la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato*, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato es autoridad obligada en materia de transparencia y debe difundir la versión pública de las sentencias que emita.

Aunado a lo anterior, la difusión de las versiones públicas de las sentencias de mérito, no solamente es acorde al principio de transparencia que deben observar los entes públicos, sino además, atiende a la transparencia proactiva, es decir, se genera una actividad que promueve la identificación, generación, publicación, difusión y utilización de información y hacer del conocimiento a la ciudadanía, de la forma más extensa, información de carácter público.

Asimismo, se tiene que, con el objeto de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información, es que en la Constitución Federal se prevé que debe atenderse al principio de máxima publicidad, conforme al cual, las autoridades están obligadas a buscar siempre la mayor publicitación de la información de dominio público.

Al respecto, resulta aplicable la **tesis XIII/2017** de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente:

«INFORMACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA ELECTORAL.- De lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que en atención al principio de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre

² La consideración contenida en este acuerdo es coincidente con el criterio adoptado en el acuerdo INE/CG109/2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del quince de febrero de dos mil veintiuno.

servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que debe realizar, inclusive, de trámites en línea y forma de pago de impuestos y servicios. De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de internet y redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocióne a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral, dado que sólo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad.»

Por otra parte, debe señalarse que cualquier campaña de difusión que se lleve a cabo respecto de las versiones públicas de las sentencias antes mencionadas, tendrá que evitar influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y deberá observar los principios de equidad e imparcialidad, por lo que tendrá que omitirse en la misma toda alusión a beneficios, programas, acciones, obras o logros vinculados con cualquier orden de gobierno; logos, emblemas, acrónimos que identifiquen a una administración, campaña institucional, programa público o acto gubernamental; tampoco podrá incluir frases, imágenes, voces o símbolos que puedan ser constitutivos de propaganda gubernamental, política o electoral; ni elementos tendentes a la promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público, partido político, coalición, candidata o candidato.

Lo anterior, se encuentra previsto en los artículos 29 y 30 del *Reglamento de campañas para el proceso electoral local ordinario 2020-2021*, aunado a que el artículo 31 del reglamento de mérito dispone que está prohibido utilizar medios de comunicación social oficiales o contratados con recursos públicos, sitios de internet oficiales y redes sociales oficiales para la promoción o difusión de propaganda positiva o negativa de un partido político, coalición o candidatura independiente, con la finalidad de influir de cualquier forma en el voto de la ciudadanía.

Por los motivos antes expuestos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, párrafo segundo, y 31, párrafo segundo de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato*; 4, 77, párrafos primero y segundo, 81, 82, párrafo primero, 92 fracción XXVI, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. En los términos contenidos en el considerando **5** del presente acuerdo, se da respuesta a la consulta formulada por el Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Con copia de este acuerdo notifíquese al Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General y la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.